

## Política y Economía

Esto es una introducción a la necesidad de poner parámetros que no puedan ser modificados por los políticos para desarrollare políticas de crecimiento que permitan llegar al *bienestar general*.

## Los Modelos en la Economía

Un *objetivo* claro de todo individuo, en general, es el hecho de intentar alcanzar un mejor nivel de vida.

La economía pone a su disposición una gran variedad de herramientas que buscan optimizar el uso de los recursos disponibles y generar nuevos recursos. Sin embargo, no es necesario ser un especialista en la materia para tener éxito y alcanzar tal objetivo. Si esto se diera, los estudiosos de la economía serían los más ricos del planeta, y no es así; cualquier persona que trabaja arduamente debe progresar si se dan las condiciones adecuadas para que esto suceda. Y las condiciones adecuadas no sólo son generadas por el propio sujeto que desea progresar; su entorno lo acompaña permanentemente en su desempeño y las reglas de juego a las que tenga que ajustarse son la clave principal que contribuye al éxito, o conspiran contra él a favor del fracaso.

Las reglas de juego son consecuencia de la aplicación de políticas.

La *política* a través de su teoría y su práctica determina el marco en el cual se van a desenvolver los ciudadanos que integran los Estados, administrados en todos sus ámbitos por los dirigentes o *conductores políticos* que, de una u otra manera, representan a esos ciudadanos.

La política, estudiada como ciencia sufre la misma carencia que todas las ciencias sociales: la imposibilidad de predecir resultados con precisión matemática. Las decisiones que adoptan los *conductores políticos* suelen estar influenciadas por presiones exógenas e incluso por el propio estado de ánimo asociado a la personalidad de cada uno de ellos, lo cual agrava el hecho de no ser posible realizar simulaciones o ejercitaciones previas a la aplicación de medidas que permitan predeterminar las consecuencias que sus decisiones pueden acarrear.

En el caso de la economía, si bien debe ser considerada como una ciencia social, permite desarrollar modelos matemáticos que brindan la posibilidad de realizar borradores donde se pueden predeterminar resultados antes de ejecutar decisiones. Por supuesto que esto no implica que lo que se dé en los papeles se vaya a dar en la realidad con absoluta precisión; las decisiones que tome cada uno de los agentes económicos influirán drásticamente en los resultados reales, cuando las medidas dispuestas pasen del papel a la realidad. Esas decisiones estarán influenciadas fundamentalmente por las percepciones que capte cada uno de los participantes de *la economía*.

Si bien el grado de vulnerabilidad de la ciencia económica como ciencia exacta es muy grande, éste puede disminuir a través de los modelos econométricos si se reduce el número de variables que los conforman, y más aún, si tales variables pueden ser controladas. Cuanto mayor control sobre las variables que integran los modelos exista y menor cantidad de variables los integren, más precisos serán los resultados a los que se llegue y estarán más cerca de la realidad posible. De lo contrario, si existe infinidad de variables y tales variables no pueden ser, mucho menos que controladas, ni siquiera orientadas, entonces las posibilidades de obtener resultados predecibles asociados a una realidad deseable con capacidad de dirigir u orientar esfuerzos, se alejan.

Observemos un simple ejemplo. En este sencillo modelo económico vamos a decir que en la economía de una *sociedad* de fantasía, se observa que la variación del nivel de precios de los bienes y servicios que los consumidores adquieren, depende exclusivamente de la variación del precio del combustible que se utiliza, entre otras cosas, en los vehículos de transporte.

Este es un viejo ejemplo que se utiliza en los primeros años de estudio de la ciencia económica para entender la interrelación que existe entre las variables que componen el mundo económico de una *sociedad*.

Quizás para muchos esta formulación parezca insólita, aunque si bien no es del todo real, es simple de comprender.

El combustible, sea cual fuere, se utiliza para el transporte de las mercaderías. Si su precio se incrementa, automáticamente los precios de los productos deben aumentar porque el costo de transporte de los mismos se verá incrementado. Este incremento se dará en toda la cadena de producción y distribución de los bienes. El aumento del precio del transporte de las materias primas influirá sobre el costo total de fabricación de cada producto final, más aún, si el combustible es utilizado en alguna otra etapa de la producción de determinados bienes. Luego, el traslado del producto a los puntos de venta de los distribuidores incrementará el precio del bien tantas veces como sea necesario llevarlo de un lugar a otro hasta llegar al punto de venta donde será adquirido por los consumidores. En un país con inmensas extensiones, como lo es la Argentina, y mucho más, en una provincia lejana de los grandes centros de producción del mundo, como lo es Tierra del Fuego, las consecuencias terminan siendo catastróficas, marcando grandes diferencias en el precio de un bien a la salida del punto de producción, respecto del mismo bien adquirido en localidades ubicadas a grandes distancias de Ushuaia.

Naturalmente, los productores preferirán instalarse cerca de los grandes centros de consumo. Esto potencia las diferencias en el desarrollo regional a no ser que existan *políticas económicas* de carácter estratégico que brinden grandes *ventajas* a quienes deciden instalar fábricas o que las metodologías de producción sean tan eficientes que permitan absorber las diferencias de costos al incrementarse la capacidad de producir mejor y más barato. En resumen, lo que marca la diferencia

que puede atraer a un productor a instalarse lejos de un gran centro de consumo, son la *ventajas* que éste identifique, sean cuales fueren.

Pero las consecuencias de las variaciones de precio en los combustibles no finalizan aquí. El transporte no sólo existe para el traslado de bienes. Las personas también se movilizan. Muchos utilizan medios públicos; otros utilizan sus propios medios. Las empresas que brindan servicios de comunicación y energía necesitan trasladar a su personal para mantener las infraestructuras instaladas.

Sigamos imaginando las consecuencias de este supuesto: si el precio del combustible se incrementa, automáticamente se reduce de manera equivalente la capacidad de consumo de los consumidores.

Evidentemente habrá menor consumo de combustible, lo cual lleva a que hayan menos traslados de consumidores hacia los puntos de consumo; y desde el punto de vista de la capacidad de comercialización, habrá menos oportunidades de concretarse ventas, y eso es muy malo.

Seguramente los consumidores no dejarán de cumplir con sus necesidades mínimas de movilidad, principalmente a sus lugares de trabajo. Aquellos trabajadores cuyos honorarios no estén prefijados a través de algún tipo de relación de dependencia contractual, intentarán acomodar sus remuneraciones en igual sentido que el incremento en el precio del transporte. Si el precio del combustible aumentara de manera exorbitante, entonces todas las consecuencias antes mencionadas dejarían de ser posibles actitudes de los actores económicos y serían hechos reales, e incluso los propios trabajadores en relación de dependencia tendrían necesidad de recibir salarios más elevadas para poder cubrir los incrementos de precios sufridos en toda la economía.

Esto podría compararse a una espiral recesiva; una espiral descendente que contagia expansivamente. Dramaticemos un poco más: El aumento en los salarios y la remuneración por servicios lleva aparejado un mayor costo de producción de bienes y prestaciones de servicios, con lo cual todos los precios volverían a aumentar, incluso, los mismos costos de producción de combustible. Así se ingresa en un ciclo de nunca acabar, que puede generar una situación de inflación estructural, de aumento de precios permanente, que sólo podría detenerse si reconociéramos que esta economía es absolutamente dependiente de una sola y única variable, tal como lo supusimos al iniciar este ejemplo, y que, si se pudiera ejercer algún tipo de control directo o al menos una orientación inducida o provocada sobre ella, esta escalada desenfrenada podría eliminarse.

Entonces sólo habrá que ejercer control sobre esta única variable: el precio del combustible. Si el precio del combustible se mantuviera constante, y la economía no dependiera más que de esta variable, en el peor de los casos, se mantendría en un nivel constante, o crecería de manera natural de acuerdo al crecimiento que experimentara cada uno de los agentes económicos en busca de un mejor nivel de vida. Si el precio del combustible se redujera, entonces no sólo no habría incremento de precios, todo lo contrario, los precios podrían reducirse si los productores, a partir

de la competencia por lograr vender más de sus productos, se vieran obligados a trasladar la reducción de costos al precio final de cada producto o servicio ofrecido. Los consumidores tendrían una mayor capacidad de consumo dada por la baja general del nivel de precios o al menos por el hecho que no necesitarían la totalidad de los recursos que tenían destinados para el transporte, pues ahora el precio del mismo sería menor.

Podría suceder que la baja del precio del combustible no implicara una automática reducción del precio del transporte si los proveedores de este servicio no trasladaran la baja de costos al precio final del servicio. En este caso habría una mayor acumulación de *riquezas* en un grupo determinado como es el de los empresarios proveedores de servicios de transporte. De todos modos, aun cuando los empresarios del transporte se beneficiaran con una mayor ganancia, prácticamente la totalidad de los productos y servicios que tienen relación con el precio de los combustibles y que necesitan ser transportados, podrían bajar sus precios a partir de la baja del precio del combustible. Esto promovería la competencia entre productores que buscan obtener mayores ventas.

Sin embargo, lo anterior no sucedería si la baja se diera en los costos de producción de combustible y ella no se trasladara al precio final del mismo. En este caso la acumulación de mayores *riquezas* se estaría dando en otro grupo, el de los productores de combustible.

Hasta aquí llega la ciencia de la economía como adivina del futuro. Sólo puede predecir, en este sencillo modelo que, si el precio del combustible sube, baja o se mantiene constante, suceden cosas favorables o desfavorables para los consumidores. Incluso conociendo algunos valores matemáticos, podría apostarse a la obtención de algunos resultados que reflejen en números la realidad.

Con estos datos, en este modelo, debería aplicarse el sentido común, que no es el común de los sentidos, para hallar soluciones coherentes a los problemas planteados, pero a partir de aquí las decisiones pasan a manos de la política. Los *conductores políticos* deberán determinar si permiten que alguno de los dos grupos de poder antes mencionados, los dos, o ninguno, se vean beneficiados por una baja de costos que puede surgir por infinidad de diversos hechos. Si pudieran ejercer control directo sobre el precio del combustible, podrán exigir que el beneficio se traslade a la totalidad de los consumidores con el consecuente beneficio para todos por efecto de un mayor nivel de consumo.

Quizás consideren que la mejor manera de controlar el precio del combustible sea dominando la producción del mismo.

Quizás decidan la conveniencia de controlar también el transporte de mercaderías y personas.

Quizás prefieran implantar precios fijos establecidos por los propios dirigentes, orientados por funciones matemáticas que expresen el nivel de consumo general y

los costos de producción del combustible, Quizás fijen precios para el transporte, olvidando de esta manera los problemas que implicarían para el Estado administrar eficientemente la actividad de producción de combustible o la prestación de servicios de transporte.

Quizás decidan dejar todo abierto a la libre competencia e intervengan, o no, en la formación del precio del combustible y del transporte a través de impuestos y subsidios.

Las opciones son múltiples, podríamos diseñare casi infinitas, y en cada una de ellas deberá intervenir otra vez el análisis económico, no sólo para observar las consecuencias sino para ejercitar la correcta implementación de las medidas adoptadas. Pero siempre, todas las posibles medidas a adoptar, dependen de la decisión de los políticos.

Lo ideal sería que las políticas cambien, se adapten en función de las circunstancias y de las ideas de los políticos, como abanderados de lo *“de los ciudadanos”*, pero que esta oscilación no sea brusca, de modo de reducir la incertidumbre de aquellos que hacen planes de producción o prestación de servicios en el mediano y el largo plazo, pues en ese pensamiento futuro se sustentan los proyectos que solidifican la prosperidad de una *sociedad* con estabilidad.

Para la ciencia económica, en este simple modelo, la respuesta es tan simple como el mismo modelo. Por un lado, hay una solución teórica como premisa: si se ejerce control, o al menos puede orientarse la formación del precio del combustible, que es la única variable del modelo, la ciencia económica, a través de sus herramientas, puede inducir la estabilidad necesaria en el mismo para lograr crecimiento. Por otro lado, la solución práctica que surge de la teoría económica aplicada, indica que para lograr un control naturalmente equilibrado del precio del combustible, sólo es necesario que exista suficiente cantidad de producto en la economía de manera que la demanda sea abastecida en forma constante y permanente y así se evite que el precio se incremente.

Para lograr el abastecimiento constante y permanente de todo lo demandado será necesario asegurarse que no exista sólo un proveedor o un grupo de proveedores. De esta manera el precio estaría naturalmente controlado y orientado por la ley de oferta y demanda.

Si existiera un sólo proveedor o un grupo de proveedores el precio estaría sujeto a la decisión de este único productor o del grupo de productores que, sin duda, trabajarían en forma conjunta en pos de su mayor beneficio.

Con monopolio o sin él, los políticos pueden hacer uso de las herramientas de la ciencia económica, interviniendo sobre la única variable del modelo.

El sentido común indica que es necesario crear la mayor cantidad de fuentes de abastecimiento de combustible que compitan entre sí por alcanzar mayor eficiencia y reducción de costos, proveyendo el suministro necesario en forma constante y permanente. Es el principio de la competencia; aunque existen circunstancias en las que es necesario y conveniente hacer valer otros principios por encima de éste.

Imaginemos que una *sociedad* extendida por un desierto necesita abastecerse de agua. Si sólo hubiera un pequeño pozo, todos acudirían a él y el suministro podría llegar a ser caótico. Si hubiera muchos pozos de agua distribuidos por el territorio, la posibilidad de que existan conflictos, disminuiría notablemente. Es algo parecido al ejemplo de la torta de cumpleaños.

Ahora sí; hasta aquí llega la ciencia económica; una vez que los políticos deciden e implementan, surgirá la necesidad de tomar otras decisiones políticas conexas y relacionadas, buscando la manera de corregir los desvíos originados en la decisión primitiva cuando se observe que no se alcanzaron los *objetivos* perseguidos o que las consecuencias de los cambios infligidos en alguna variable, generan modificaciones inesperadas en otros ámbitos.

Como hemos visto las opciones que se plantean en este simple y clásico modelo son infinitas, donde los *intereses* particulares, los de los grupos de poder y el sentido común chocan permanentemente.

Imaginemos que el ejemplo se complica un poco más. Ahora a este modelo le agregaremos las necesidades de fondos requeridos por el Estado. Diremos que en la formación del precio del combustible existe un componente que lo encarece, que debe ser considerado como un costo adicional y que se denomina “impuesto”. En el modelo económico de este país ficticio, el componente “impuesto”, sólo se aplica exclusivamente al combustible.

Consideremos que en este país donde el modelo expresado tiene cabida, existen diferentes grupos sociales distribuidos a lo largo y a lo ancho del territorio y que, conociendo esta relación entre la capacidad de crecimiento de la economía y el precio del combustible se decidiera, en el nivel estratégico, que deben aplicarse políticas para desarrollar las distintas zonas del territorio, favoreciendo las posibilidades de alcanzar un mejor nivel de vida de todos los grupos sociales que lo habitan, a partir de la *manipulación* de la única variable que compone el modelo económico presentado. Una concepción bien federal.

El *gobierno* tendría ahora tres opciones. Por un lado, podría intervenir directamente en la formación del precio del combustible, por ejemplo, participando en su producción o fijándolo de manera arbitraria. Por otro podría, dejarlo liberado a la realidad de los costos, e incidir en el precio final del mismo, sólo variando el componente “impuesto” que depende directamente de sus decisiones. Por último, podría aplicar las dos medidas antes mencionadas en forma conjunta o combinada.

Por ahora, no consideraremos una *política* asumida por las autoridades respecto a la formación del precio del combustible participando en su producción; simplemente, diremos que existe un precio que varía libremente y que el *gobierno* carece de posibilidad de participar en la formación del mismo. En otros términos, digamos que existe absoluta libertad en la formación del precio del combustible, que la demanda siempre ha estado abastecida y que el precio del producto se ha incrementado sólo cuando, por alguna u otra razón, los usuarios han percibido escasez del mismo. Podemos decir que, en realidad, la *política* asumida por las autoridades, es

justamente, no intervenir en la formación del precio del combustible, con lo cual, sencillamente, se podría dar por entendido que los *conductores políticos* han decidido no sumarse a su trabajo cotidiano otra tarea, al tratar de ejercer control o dominio sobre otra variable.

El *gobierno* sí define, a través de sus decisiones políticas, el valor del componente “impuesto” que adicionamos al costo del producto. Entre las posibles opciones, el componente “impuesto” podría ser una suma fija por cantidad producida de producto o por venta realizada. Podría ser una tasa porcentual por cantidad producida, o una tasa porcentual de la cantidad vendida. También podría ser una combinación de las dos anteriores o cualquier otra opción que a cualquiera pudiera ocurrírsele. En cualquier caso, el productor siempre lo considerará como un costo adicional que será trasladado al consumidor.

La ciencia económica podrá expresar matemáticamente las consecuencias que acarrearía cualquiera de las posibles decisiones que adopten las autoridades respecto a la definición del componente “impuesto”. Incluso podrá establecer un orden en función de las consecuencias positivas y negativas que podría generar la aplicación de cada una de las posibles decisiones que se deseen adoptar y así se podría definir la más apropiada. Lo importante es observar que el campo de acción en donde las autoridades pueden intervenir se amplía rápidamente; que para cada posible decisión que las autoridades asuman existen consecuencias matemáticamente predecibles cuando se aplican sobre la ecuación econométrica que representa el modelo económico, y que tales variaciones pueden apreciarse fácilmente en este sencillo modelo.

Volviendo al ejemplo y considerando la decisión de nivel estratégico nacional que busca aplicar políticas para desarrollar las distintas zonas del territorio, tomemos como una opción que los *conductores políticos* podrían utilizar, un sistema discriminatorio, definiendo diferentes componentes impositivos a aplicar al combustible que se consuma en cada una de las distintas regiones. Los *conductores políticos* podrían definir zonas o regiones de manera arbitraria, estableciendo límites físicos caprichosos e incluso pudiendo eliminar el componente impositivo en algunas de ellas. Curiosamente, este es el caso que nos toca vivir en Tierra del Fuego.

Aquí es donde la ciencia económica comienza a hacerse menos prolija.

Ahora no es una sola la ecuación econométrica que va a representar el modelo económico de este país ficticio. Ahora habrá una ecuación econométrica para cada una de las regiones que posea componente impositivo diferente, a no ser que exista algún mecanismo que relacione la diferenciación entre los distintos componentes impositivos que se aplican en cada región. De esta manera el modelo se complicaría, en el mejor de los casos, no sería una única ecuación, sino una serie de ecuaciones interrelacionadas entre sí a través de una variable controlable conocida. Matemáticamente, todavía seguirían siendo predecibles los resultados a través de un cada vez más complicado sistema de ecuaciones.

Si las autoridades políticas decidieran que cada región tuviera un componente impositivo diferente no interrelacionado con los otros a través de algún mecanismo automático, entonces, se multiplicaría la necesidad de tomar decisiones.

Las autoridades serían responsables de definir para cada caso el componente impositivo.

El campo de acción en donde los *conductores políticos* podrían intervenir se ampliaría notablemente. Aquí es donde, otra vez aparecerá la ciencia económica para calcular el componente “impuesto” adecuado a la decisión tomada para cada región. Lo que sí se complicará será la determinación de resultados comparativos reales pues las diferencias de precios originadas en la variación del componente impositivo podrán acarrear infinidad de consecuencias tanto para los hábitos de los consumidores como para el accionar de los proveedores. Recordemos que la variación de los hábitos de los proveedores y consumidores estarán relacionadas con sus propias percepciones de la nueva realidad. Por ejemplo, los consumidores podrían trasladarse a adquirir combustible a las regiones más beneficiadas con precios menores; Los productores podrían no trasladar los beneficios reales en la reducción de costos para cada zona a los consumidores, o podrían fraguar sus declaraciones impositivas declarando ventas realizadas en una región como si se hubieran realizado en otra, lo cual implicaría que se debería ejercer controles más rígidos. Las mismas autoridades políticas regionales presionarían a las autoridades superiores para obtener mayores ventajas a través de una mayor disminución en el componente impositivo aplicado a su región; y si lo consiguieran, rápidamente las autoridades de otras regiones harían lo mismo.

Así el sistema deja de ser un sistema y se convierte en una caja de sorpresas. Las reglas de juego, las normas o regulaciones pasan a ser tantas que se hace muy difícil ejecutarlas correctamente. Recordemos que la complejidad de las *leyes*, debilitan su imperio; aparece lo complicado, lo impredecible, lo que no es lineal y crea un nuevo campo de estudio, que sería mejor que no existiera considerando los esfuerzos que absorbe.

Las autoridades políticas, en la medida en que a más variables acceden, toman más decisiones en el infinito campo de acción donde pueden intervenir, generando un clima de mayor incertidumbre, donde nada se determina con precisión excepto que difícilmente los ciudadanos puedan percibir la estabilidad necesaria que les permita adquirir un mejor nivel de vida.

La falla no está en la implementación de las políticas, está en creer que la intervención activa en el ritmo natural de la economía puede contribuir a alcanzar resultados favorables sin considerar que los ciudadanos son los que deciden. Esto es algo así como hacer y condimentar un puchero; imaginemos una cacerola llena de agua con papas, choclos, batata, puerros, repollos, garbanzos, cebollas, panceta, chorizos, aceite, mostaza, etc. etc. Entonces, viene uno y agrega más cebolla, otro le pone más sal, otro le agrega pimienta, otro piensa que es demasiado y tira un cuarto de la cacerola; otro le agrega agua, y así cada uno le hace un cambio al proyecto de



puchero de acuerdo a su ojo de cocinero. Al final, en vez de puchero, tenemos una exquisita sopa de verduras y carne, pero de puchero, nada.

Decisiones políticas que surgen del más alto nivel estratégico de este tipo son comunes y se han observado cotidianamente a lo largo de todo el siglo pasado y éste, no sólo en la Argentina. Son decisiones propias de los dirigentes que desean pasar a la historia como los precursores del desarrollo nacional; como los cocineros del más espectacular puchero. Creen que el crecimiento económico depende exclusivamente de “la maniobra” que realice el *gobierno* de turno y creen que todo se soluciona con el arte de negociar, cosa que es posible cuando no hay demasiados actores que persigan *intereses* particulares en esa negociación. Siempre la concertación entre partes puede darse si los *intereses* son los mismos, pero en general, las concertaciones se realizan entre grupos de poder antagónicos que no contemplan el interés principal de los ciudadanos que sólo buscan un mejor nivel de vida<sup>1</sup>; es la *afinidad*.

El manejo adecuado de las variables económicas debe realizarse por expertos conocedores de las mismas. Ni una sola persona, ni un grupo de hombres excelentemente bien preparados, pueden controlar eficientemente todas las variables en forma conjunta y simultáneamente. Si los especialistas no tienen aptitud para hacer esto, los dirigentes políticos mucho menos. Es algo parecido a cocinar. Antes de cocinar existe la necesidad de alimentarse y uno puede hacerlo con delicadeza saboreando un rico plato, o solamente comiendo. Cualquiera puede hacer una pizza, pero es mucho mejor que la haga alguien que tiene experiencia y cuenta con las herramientas apropiadas, de lo contrario, de hambre no vamos a morir, pero seguramente no disfrutaremos de la mejor pizza. Cuanto más complicado sea el plato que deseamos saborear, más difícil será que un cocinero con poca experiencia logre un resultado exitoso. Comparativamente, hacer pizza sería como tratar de controlar un modelo económico formado por pocas variables; en cambio, un plato más sofisticado representaría un modelo económico con muchas más variables. Si lo que se busca es satisfacer la necesidad de alimentarse saboreando un buen plato, entonces lo mejor es ajustarnos a nuestra realidad y no tratar de dar un paso más largo de lo que nuestras piernas pueden dar. Cocinar algo simple pero

---

<sup>1</sup> La *democracia* y el capitalismo tienen muy diferentes puntos de vista acerca de la distribución adecuada del poder. La primera aboga por una distribución absolutamente igual del poder político, “un hombre, un voto”, mientras el capitalismo sostiene que es el derecho de los económicamente competentes expulsar a los incompetentes del ámbito comercial y dejarlos librados a la extinción económica. La eficiencia capitalista consiste en la “supervivencia del más apto” y las desigualdades en el poder adquisitivo. Para decirlo de la forma más dura, el capitalismo es perfectamente compatible con la esclavitud. El sur norteamericano tuvo un sistema semejante durante más de dos siglos. La *democracia* no es compatible con la esclavitud. En una economía con una desigualdad que crece rápidamente, esta diferencia de opiniones acerca de la distribución adecuada del poder es como una línea de falla de enormes proporciones que está por deslizarse. En las *sociedades* capitalistas democráticas el poder proviene de dos fuentes: la riqueza y la posición política. Durante los dos últimos siglos dos factores han permitido que coexistieran estos dos sistemas basados en principios antiéticos acerca de la correcta distribución del poder. En primer lugar, siempre ha sido posible convertir el poder económico en poder político, o a la inversa, el poder político en económico. Pocos han ostentado uno sin obtener rápidamente el otro. En segundo lugar, el *gobierno* ha sido activamente utilizado para alterar los resultados del mercado y generar una distribución del ingreso más pareja de la que habría existido si hubiera dejado actuar libremente al mercado. Aquellos que se sienten desplazados en la economía de mercado ven al *gobierno* como una fuerza positiva que procura incluirlos cuando llega el momento de recoger los frutos del capitalismo. Sin estas dos realidades probablemente hace tiempo que habría habido una fractura mayor en la línea de falla entre los principios democráticos y los principios capitalistas acerca de la distribución del poder.

Thurow, Lester C. “El Futuro del Capitalismo” (Argentina: Javier Vergara Editores S.A., 1996) Capítulo XIII, “*Democracia* Versus Mercado” – p 258

sabroso será mucho mejor que intentar hacer un gran plato que resulte desagradable. En general los políticos de nuestros días, (más *ideotes* que *politikos*) son cocineros soberbios que pretenden dominar una gran cantidad de variables y cuando finalizan, nos sirven un plato muy salado, por momentos ácido y por momentos dulce, quemado por exceso de cocción y que ni siquiera es bien percibido por los comensales cuando nos sentamos a la mesa.

El modelo puede cambiar y las conclusiones generales seguirán siendo las mismas. Digamos que el aumento de precios no depende del precio del combustible, sino que depende exclusivamente del precio de los servicios de comunicaciones telefónicas o, exclusivamente del precio de la energía eléctrica, o del precio del bien o servicio que se desee. En todos los casos siempre sucederá exactamente lo mismo que ha sucedido en el modelo analizado; las decisiones políticas influyen directamente en el resultado económico a no ser que puedan acotarse a un campo de acción bien determinado.

Imaginemos cuánto se complicarán las cosas si el modelo económico no dependiera sólo de una variable, como en los casos antes mencionados, sino que lo hiciera de una combinación de todas ellas y muchas otras más. Para los *conductores políticos* el campo en donde pueden tomar decisiones se multiplica geométricamente, mientras que para los agentes económicos que se desenvuelven en esa economía la vulnerabilidad crece exponencialmente.

En la medida en que aumenta las variables que deben dominar los encargados de tomar decisiones, más difícil se hace ejercer el control sobre ellas y se corre el riesgo de perder el control.

Cuando alguien se propone cocinar pizza, puede hacerlo de distintas formas. Por empezar puede comprar una pizza precocida y sólo agregarle los condimentos apropiados para luego cocinarla; o puede hacerlo mucho más complicado si prepara la masa y la salsa, o si, a parte, pretende utilizar queso de producción propia. Digamos que cada una de las posibles opciones para hacer pizza se puede expresar como un modelo integrado por una serie de variables que definen la manera en que uno va a hacer pizza. Se puede adoptar cualquiera de los modelos propuestos. Si alguien con poca experiencia tuviera que hacer una gran cantidad de pizzas, seguramente adoptaría el modelo más simple, es decir el de menor cantidad de variables, o sea, comprar las pizzas precocidas y sólo agregarles condimentos, para luego cocinarlas. Es una decisión natural que depende de la astucia de quien decide. El riesgo de llegar a un resultado desfavorable se reduce casi en su totalidad a no ser que existan muchos cocineros trabajando en la misma cocina.

El modelo surge de la realidad, nadie lo impone. Nadie define cómo hacer pizza, sólo la situación genera la necesidad y el modelo surge como resultado de la solución adoptada; nadie necesita que le digan cómo hacer pizza, todos estamos seguros que sabemos hacerla, aunque nunca la hayamos hecho, y si es así, probando llegaremos a un resultado y allí surgirá nuestro propio modelo, que podrá perfeccionarse oportunamente.

Si hay muchos cocineros, *conductores políticos*, que intervienen permanentemente, nunca se llega a determinar una manera sistemática de hacer pizzas, ni tampoco se llega a definir un modelo.

Si se logra definir un modelo y luego los conductores intervienen en el manejo de las variables, agregando más o menos condimentos o cocinando más o menos tiempo, el resultado nunca podrá ser el mismo. Entonces se hace necesario que exista una formulación con parámetros bien determinados que deben ser respetados si lo que se busca es conseguir producir siempre pizza con el mismo sabor. Digamos que se necesita una plataforma básica e indiscutible.

En el manejo de la economía sucede exactamente lo mismo. La realidad expresa el modelo económico. La expresión óptima para el control armónico del mismo es aquella que contiene la menor cantidad de variables controlables posibles.

El *objetivo* que se persigue al descifrar a través de un modelo el comportamiento de la economía, es buscar mecanismos que incentiven o provoquen una aceleración del crecimiento económico. Lo ideal sería que tales mecanismos no puedan generar distorsiones que afecten el desenvolvimiento de los agentes que intervienen en la economía.

Si lo que se busca, en el fondo, es lograr que los ciudadanos adquieran un mejor nivel de vida, la modificación de las variables que componen el modelo económico se convierte en un arma de doble filo que puede beneficiar o perjudicar a unos, a otros o a todos. Es como manejar una fábrica de pizza. Mientras funcione, siempre se producirán pizzas, pero dependiendo de quiénes estén trabajando, algunas tendrán un sabor y otras otros. Si buscamos que siempre tenga el mismo sabor, es decir, que el resultado sea siempre el mismo, entonces habrá que acotar la libertad de acción de quienes la hacen, imponiendo una plataforma básica de normas para realizar el trabajo.

En la economía, habrá que acotar la libertad de acción de los políticos. Obviamente, todos, tanto los trabajadores de la fábrica de pizza como los políticos que toman decisiones tienen las mejores intenciones; aunque todos sabemos, los cementerios están llenos de buenas intenciones que nunca llegaron a convertirse en realidad.

## **El Poder de los Políticos**

¿Cómo podemos lograr acotar el campo de acción de los políticos sin que estos sientan que pierden *poder*?

Empecemos por lo *importante*; llegado el momento nos ocuparemos de lo *necesario*. La economía existe si existen agentes económicos y los agentes económicos son siempre ciudadanos con derechos, garantías y obligaciones, que al mismo tiempo son productores y consumidores de bienes y servicios que generan *riqueza*.

Este don particular en el que se desdobra un agente económico es uno de los orígenes de la Teoría Económica. Por un lado, la Teoría del Consumo asociada a una serie de variables que intentan explicar los mecanismos que influyen en la toma de decisión de los consumidores. Por el otro, la Teoría de la Producción, también asociada a una serie de variables que intentan explicar los mecanismos que influyen en la toma de decisión de los productores. Pareciera que hay una frontera que divide y encuentra a la teoría económica en dos teorías opuestas y unidas.

Como un mostrador en un comercio separa y encuentra al comprador y al vendedor, en la Teoría Económica, la Teoría del Consumo expresa el lado de la demanda y la Teoría de la Producción expresa el lado de la oferta que, estudiadas de manera separada, se encuentran en un valor simbólico que todos conocemos como *precio*.

El *precio* no es otra cosa más que una expresión de aquel valor que el consumidor está dispuesto a entregar a cambio de algo que el productor también está dispuesto a entregar.

Si el *precio* ofrecido por el demandante no satisface lo deseado por el oferente entonces, no habrá transacción.

Si el *precio* demandado por el oferente no es el que el demandante está dispuesto a pagar, entonces no habrá transacción.

Si el *precio* ofrecido por el demandante es mayor al deseado por el oferente, habrá transacción y el oferente se verá beneficiado por obtener algo más de lo deseado.

Si el oferente deseara un valor determinado por el bien ofrecido y no hubiera demandantes capaces de pagar el *precio* deseado para el valor determinado de tal bien, debería bajar el *precio* deseado hasta encontrar a alguien que esté interesado en realizar la transacción, sin que por el hecho de bajar el *precio* del bien haya variado el valor que el bien tiene para el oferente.

Así sucesivamente se irán dando situaciones diferentes donde todas tendrán en común la existencia de valores determinados por oferentes y demandantes, de *precios* de intercambio y de cantidades de bienes o servicios que se entregan a cambio. He aquí la clave de la economía: “transacciones” de bienes y servicios que se realizan a diferentes *precios* de acuerdo a las decisiones que toman los agentes económicos.

La teoría económica explica las actitudes de los agentes económicos en forma individual y también lo hace en forma agregada. Es decir, analiza al consumidor y al productor como entes autónomos e independientes, y en forma agregada, la sumatoria de todos los agentes económicos de la economía, sean estos consumidores o productores en forma separada, y de manera unificada o conjunta.

Así determina también la existencia de un lugar común para todos los bienes y servicios que son sujeto de transacciones económicas. Ese lugar común es el *precio de equilibrio* de la economía. En ese *precio de equilibrio*, un valor simbólico, una abstracción que expresa una aglutinación de los *precios* a los que se realizan todas las transacciones de la economía, se determina la cantidad de bienes y servicios que la economía en su conjunto es capaz de producir y consumir al mismo tiempo.

Esa cantidad de bienes y servicios que la economía es capaz de producir y consumir al mismo tiempo representa el nivel de bienestar alcanzado por los ciudadanos que se desenvuelven en la misma. Conociendo esto, es posible definir que tendrán mayor bienestar aquellos ciudadanos que se desenvuelvan en economías capaces de ofrecer y demandar mayor cantidad de bienes y servicios en los niveles de precio de *equilibrio* más bajos posibles.

Cuando intentamos hacer una comparación entre las economías de los países llegamos a la conclusión que, en realidad, la real competencia se da en el campo subjetivo o simbólico que cada individuo percibe al comparar cómo viven los ciudadanos de esos distintos países. Evidentemente se hace imposible precisar científicamente las percepciones individuales. Quizás podría acercarse a un resultado relativamente aceptable una investigación basada en encuestas que sean procesadas estadísticamente.

Si realizáramos en cada país de esta competencia internacional un estudio económico en el cual se pudiera determinar cuánto consume la totalidad de los individuos de una *sociedad*, es decir la sumatoria de todos los consumos realizados por cada *sociedad*, y encontráramos un precio de *equilibrio* común a todos los países que nos permitiera hacer comparaciones bajo los mismos parámetros, y en forma paralela se desarrollara una investigación basada en encuestas que sean procesadas estadísticamente, donde se computen las percepciones individuales de los niveles de vida de los ciudadanos de esos países, muy posiblemente llegaríamos a la conclusión que el orden en el que se dispondría el resultado de los dos trabajos sería prácticamente el mismo, con sutiles diferencias entre uno y otro estudio.

La afirmación anterior surge sólo de observar la realidad, analizando la información existente respecto a los niveles consumo totales de distintos países y comparándola con la percepción propia y la de los allegados más cercanos a uno mismo.

La observación de la realidad es algo que cualquiera puede hacer en este preciso momento. Por ejemplo, cualquiera de nosotros tienen una percepción del nivel de vida de un canadiense y de un brasileño; si investigamos un poco más, y observamos el nivel de consumo total y de precios de los dos países, encontraremos que en Canadá la cantidad de bienes y servicios que se producen y se consumen al mismo tiempo es mucho mayor que la cantidad de bienes y servicios que se producen y se consumen en Brasil; y todavía nada hemos dicho del nivel de precios, pero seguramente el nivel de precios relativos de la economía canadiense debe ser menor o similar al del Brasil.

Debemos tener en cuenta que en la economía globalizada las diferencias en el nivel de precios relativo pueden ser ínfimas, y que incluso, existiendo un nivel de precios mayor en Canadá que en Brasil, si los canadienses pueden consumir y producir mucho más, aunque paguen más por esos bienes, tienen una capacidad de acceso a un bienestar mayor que los ciudadanos brasileños. Todo está relacionado con la mayor capacidad de producción de bienes y servicios.

El *objetivo* de toda política económica, es decir, de cualquier acción que intente modificar una situación dada en la economía, debe ser tratar de lograr un incremento en las cantidades de bienes y servicios demandados y ofrecidos, y debe tender a buscar que todos los ciudadanos puedan acceder a ellos.

Existiendo cantidad indeterminada e indefinida de bienes y servicios en una economía, sería imposible realizar una política económica específica para cada uno de ellos que intentara incrementar su nivel de oferta y demanda.

Las autoridades políticas deben comprender este hecho; no es saludable que tengan demasiada libertad de acción en la definición de políticas específicas para cada actividad productiva. Estas acciones solamente siembran injusticia, porque se crean oportunidades para algunos que terminan siendo pagadas por otros. Un claro ejemplo de esto se da cuando se establecen precios fijos e inamovibles de manera compulsiva. Automáticamente cae la oferta y se forma una economía paralela que se conoce como *mercado negro*, donde se realizarán transacciones a precios diferentes de los fijados, seguramente mucho más caros, de modo de generar una mayor injusticia, pues sólo podrán alcanzar la satisfacción aquellos que puedan pagarlos, haciendo que la medida que buscaba un beneficio general, traiga aparejado un perjuicio discriminatorio.

Las medidas de política económica deben adoptarse en forma íntegra y global para todas las actividades que componen el agregado de la economía. Políticas específicas son más permeables a generar distorsiones económicas que acarrear nuevas distorsiones, y aun más cuando se tratar de componer errores anteriores; éste es un dato real y permanente que surge de la observación y la experiencia.

Analicemos un poco más a fondo cuáles son los componentes que conforman el consumo total de una *sociedad*. De hecho, habrá *consumo* realizado por los particulares, es decir, los ciudadanos, y habrá consumo realizado por el sector público, es decir, el Estado dirigido por el *gobierno*. También habrá que tener en aquella porción de consumo que se utiliza para la reproducción de bienes, que llamaremos *Inversión*; y si la economía de una *sociedad* tiene relaciones comerciales con otras *sociedades*, entonces habrá un intercambio que de consumos que deberá ser tenido en cuenta.

La suma de todos estos *gastos* que se realizan a lo largo de un período de un año, la teoría los llama Demanda Agregada. Técnicamente, la Demanda Agregada se grafica con una curva de pendiente negativa que representa la relación existente entre el nivel general de precios de cada economía y el nivel de gasto total de todos los bienes y servicios transados en esa economía. La curva de pendiente negativa indica que a medida que aumentan los precios, el gasto tiende a ser menor, o sea que cuando se elevan los precios, si se mantiene constante la cantidad de dinero disponible, la cantidad de bienes y servicios que pueden adquirirse, cae.

En todas las economías solo hay dos grupos de actores con capacidad de gastar o realizar *gastos*, y *consumir*. El grupo más grande está formado por los ciudadanos,

los agentes económicos particulares. El más pequeño está formado por el Estado, los *gobiernos* que tienen la capacidad de realizar *Gasto Público*.

Recordemos que estos dos actores, como agentes económicos, también son productores de bienes y servicios, y si bien el Estado no es un ciudadano, la teoría indica que es el conjunto de todos los ciudadanos que lo componen, con lo cual podemos considerarlo como un ciudadano más y, por cierto, sumamente significativo.

En muchas *sociedades* el Estado no es productor de bienes, pero en todos es productor de servicios. Si no brindara servicios como la seguridad, la defensa, la educación, la salud, la acción social o la justicia, entonces el Estado como tal no tendría razón de ser. De todas maneras los Estados de todos los países son grandes consumidores de bienes y servicios<sup>2</sup>.

La capacidad de consumo de todos y cada uno de los consumidores está restringida, no es ilimitada.

La restricción que cada uno tiene está dada por su capacidad de gastar y ella está dada por su capacidad de generar ingresos. Cada uno gasta de acuerdo al nivel de ingresos que está seguro va a percibir y de acuerdo a su capacidad de endeudamiento; en función de esto establece un *presupuesto de gastos*.

Si los ingresos sobrepasan el *presupuesto* de gastos determinado, existe capacidad de ahorro. Técnicamente los ciudadanos ahorran cuando sus necesidades principales están satisfechas y tienen un excedente, pero en realidad ahorran cuando tienen un propósito de consumo definido.

Siempre que el excedente no salga del sistema económico, es decir, siempre que no se aparte de la posibilidad de ser usado en algún tipo de transacción, lo ahorrado se convierte en inversión. Técnicamente, el ahorro dentro del sistema formal de la economía, es inversión. El ahorro que no está dentro del sistema formal, por ejemplo, el que se “guarda en el colchón” no puede ser utilizado, con lo cual está fuera del sistema económico hasta que su dueño decide hacer uso de él.

Los ingresos de los ciudadanos están dados por las diferencias a favor que obtienen al realizar transacciones en la economía, al vender los bienes que producen o los servicios que prestan.

El espacio donde se realizan las transacciones económicas, se denomina *mercado*.

Los ciudadanos también tienen capacidad de endeudamiento, con lo cual pueden consumir más de lo que su nivel de ingresos les permite. Oportunamente deberán devolver la cantidad de dinero tomada en préstamo y la correspondiente retribución por el servicio adquirido. Esto implica que aquellos que adquieran endeudamiento, en su *presupuesto*, siempre deberán considerar un incremento en el gasto futuro acorde al capital y los *intereses* que deban pagar por el préstamo. En el futuro deberán generar mayores ingresos para poder cubrir el gasto realizado y la retribución originada en los *intereses* a pagar.

---

<sup>2</sup> Porter, Michael, “La Ventaja Competitiva de las Naciones” (Argentina: Javier Vergara Editor S.A.) 1991. Capítulo VI “La Ventaja Competitiva Nacional en el Sector de Servicios”. Subtítulo: “Privatización de los Servicios Públicos”.

Lo ideal para cualquier ciudadano es mantener una ecuación equilibrada entre el nivel de gastos y su nivel de ingresos y de ser posible, que exista un excedente que le permita generar ahorro para realizar inversiones y producir más o adquirir bienes en el futuro.

En el Estado pasa exactamente lo mismo.

La *ecuación de presupuesto equilibrado* es una condición imprescindible para lograr su subsistencia.

El Estado realiza transacciones en la economía cuando provee servicios considerados como bienes públicos: salud, educación, acción social, seguridad, defensa o justicia. A parte también realiza transacciones como cualquier otro agente económico cuando participa en la producción y prestación de bienes y servicios, o en su consumo.

Sus ingresos están dados por su capacidad para recaudar impuestos. La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur así como el resto de las provincias argentinas, se sustenta también en los recursos de la Coparticipación Federal y de las regalías por explotación de las riquezas naturales de sus territorios.

Si estas tres fuentes de ingresos no alcanzaran para cubrir sus gastos, deberá endeudarse tal como lo haría cualquier ciudadano.

Si sus ingresos superaran sus gastos, entonces el Estado también ahorra y tales recursos se convierten inmediatamente en inversión.

Todo aquello que no es provisto por los impuestos que se aplican a los ciudadanos generadores de *riqueza*, crea condiciones de dependencia y atenta contra la autonomía de una economía, lo cual marca una debilidad política.

Hasta aquí llegan las condiciones en que se desarrolla una economía transparente.

Un ciudadano podría generar ingresos robando bienes a otros ciudadanos. Esta es una distorsión de la economía donde uno es perjudicado y otro es claramente beneficiado, pero, además, es un delito que la ley pena, muchas veces sin que el castigo sea suficiente.

Un ciudadano podría falsificar dinero, que justamente es el medio de cambio que se utiliza para realizar transacciones. Si falsificara grandes cantidades de dinero y el mismo ingresara a la economía sin que se pudiera determinar su ilegalidad, se correría el riesgo de generar un incremento de la demanda de bienes que ocasione un aumento del nivel de precios por falta de capacidad de producción, o mejor dicho, por incapacidad de los oferentes de satisfacer la demanda de manera inmediata. Falsificar dinero también es un delito que la ley pena y el castigo que se aplica a esta falta, es duro, pues la potestad de la emisión de dinero pertenece sólo al Estado.

La cantidad de dinero en circulación en la economía está relacionada directamente con la cantidad de bienes y servicios que ella misma produce y consume simultáneamente y con el nivel de *precios* que se paga por ellos. Ésta es una de las razones por la cual la potestad en la emisión de dinero recae sobre las autoridades que administran el Estado. Se puede decir que la cantidad de dinero en circulación



está respaldada por la cantidad de bienes y servicios que se producen y se consumen.

La moneda de un país se revalúa cuando la cantidad de bienes y servicios producidos y demandados es superior a la cantidad de dinero en circulación, entonces, por ejemplo, con una unidad de moneda, en el caso de la Argentina, con un peso, es posible adquirir más bienes.

Se devalúa cuando la cantidad de bienes y servicios producidos y demandados es inferior a la cantidad de dinero en circulación, entonces es necesario más de un peso para adquirir la misma cantidad de bienes y servicios que antes se adquiría con la misma unidad monetaria.

El Estado, que tiene la potestad de emitir dinero, puede utilizarla como herramienta de financiación de sus gastos. En este caso se corre el riesgo de generar una distorsión o *desequilibrio* en la economía, pues el Estado sería el único agente económico con capacidad de gastar más de lo que puede generar de manera genuina con los impuestos recaudados, o a través del endeudamiento que deberá ser pagado en el futuro con medios generados de la misma manera, es decir, en forma genuina.

Otra vez, las autoridades que administran el Estado son los únicos que tienen la capacidad de tomar decisiones que afectan el curso natural de la economía. Por esta razón es que es importante que sea la verdadera *aristocracia* la encargada de dirigir el timón de esta nave.

En este punto es clave determinar algún mecanismo que restrinja la libertad de acción de los políticos que toman decisiones, más aun cuando no son capaces de medir las pavorosas consecuencias que puede acarrear, por ejemplo, medidas que contemplen la emisión indiscriminada de moneda sin respaldo o el endeudamiento desmedido que termina comprometiendo el desarrollo de las futuras generaciones de ciudadanos.

La emisión indiscriminada de dinero sin respaldo en bienes reales o al menos potenciales, es una decisión política tan perniciosa como la producción de billetes falsos que realiza cualquier delincuente y debería ser castigada como mínimo de igual manera, considerando el perjuicio ocasionado a la *sociedad*.

Los mecanismos que se utilicen para determinar la cantidad de dinero necesaria en la economía sólo pueden ser controlados por especialistas con capacidad autónoma que no dependan del aparato político. Por esta razón es que, en la mayoría de los países, lo que se conoce como Banco Central funciona en forma sincronizada pero aislada de las decisiones de los *gobiernos* de turno.

Los bancos centrales regulan la cantidad de dinero en circulación y la capacidad de brindar crédito existente en la economía en cada momento, coordinando la actividad del sector financiero en el que se desenvuelven las entidades bancarias. De alguna manera velan por mantener estable el valor de la moneda de cada economía.

En la Argentina hemos vivido una particular experiencia en lo que se refiere al cuidado del valor de la moneda. La Ley de Convertibilidad fue un mecanismo que

restringió la libertad de acción de los políticos que tenían capacidad para influir en las decisiones relacionadas con el valor de la moneda nacional. Su influencia abría las puertas del Banco Central y sometía su *autonomía* a pesar de las intenciones que su Carta Orgánica expresa.

A través de esa Ley cada peso que circulaba en la economía debía estar respaldado por un Dólar Estadounidense depositado en las Reservas Públicas. De esta manera sólo se emitía dinero cuando la economía real crecía, es decir cuando se incrementaba la cantidad de bienes y servicios que se producían y consumían. El Estado debía adquirir la moneda extranjera que respaldara cada peso emitido y lo hacía únicamente en la propia economía comprando Dólares provenientes de los ingresos por exportaciones que los productores había realizado, o billetes provenientes de las inversiones internacionales que se establecían en el país.

La relación uno a uno tenía un efecto muy particular sobre los agentes económicos, que circunstancialmente generó confianza.

Si el patrón hubiera sido otra u otras monedas diferentes, hubiera ocurrido exactamente lo mismo, cada Peso emitido debía ser respaldado por esas monedas que podría adquirirse en la propia economía como ingresos por exportaciones o por inversiones extranjeras, pero la percepción de los agentes económicos hubiera sido diferente.

Más allá de las opiniones y prejuicios, la moneda convertible en relación uno a uno era una manera de acotar el campo de acción de los políticos.

Años más tarde, la devaluación del peso se dio sólo por la incapacidad de producción de la Argentina; pues el tipo de cambio sólo refleja esa relación: cantidad de moneda en circulación en relación con capacidad de producción de la economía. De todos modos, sin Ley de Convertibilidad, el Banco Central encontró un nuevo *equilibrio* en esa relación entre el peso y el dólar, y su tarea como siempre sigue siendo sostener ese *equilibrio* que puede lograrse cuando la capacidad productiva de la economía está en *equilibrio* con la cantidad de dinero en circulación; es una relación natural de equilibrio, oferta y demanda en la que la madre de las instituciones bancarias tiene capacidad de intervención, pero no absoluta.

En un modelo como el planteado en la actualidad, cuando se detecta crecimiento económico hay mayor Demanda Agregada, con lo cual la economía se hace atractiva para el ingreso de capitales extranjeros hay mayores exportaciones de bienes y servicios, y la relación entre el peso y el dólar muestra una revaluación de la propia moneda.

Si en algún momento dejaran de realizarse inversiones internacionales o se produjera un déficit pronunciado en la balanza entre exportaciones e importaciones o, por alguna razón disminuyera la demanda interna de los consumidores, entonces el Estado perdería su capacidad de respaldar una mayor circulación de moneda. En otras palabras, la economía no estaría creciendo, con lo cual no sería necesario emitir más dinero y posiblemente el *equilibrio* en la relación entre el peso y el dólar o

la moneda fuerte de turno, demuestre devaluaciones o desvalorización de la propia moneda.

La utilización de un tipo de cambio fijo, algo similar a la Convertibilidad, es una manera de restringir la libertad de acción de los políticos, de igual modo que lo es, en menor grado, la fijación de bandas de flotación dentro de las cuales puede variar el valor de la moneda extranjera. No es una solución que garantiza el crecimiento del país pues, de todos modos, existe un amplio campo para la intervención de los políticos que toman decisiones y provocan distorsiones inadecuadas.

La Ley de Convertibilidad es más que mantener fijo el tipo de cambio, pues anula absolutamente la capacidad de intervención de los políticos en forma directa en la política monetaria del país y deja un amplio espacio al Banco Central para ejercer su aptitud técnica como activador de la economía, sin crear dinero impuro o no respaldo. Si bien esta aptitud puede ejercitarse sin que exista convertibilidad monetaria, cuando la calidad de la política monetaria es endeble, es recomendable utilizarla como plataforma para corregir malas costumbres, lo cual no implica que la relación entre la moneda propia y el patrón deba ser de uno a uno. De hecho, es una decisión política mantener el control en la relación entre las reservas de divisas guardadas en el tesoro y la cantidad de moneda propia en circulación, depósitos bancarios y otros activos monetarios.

La capacidad técnica que tiene un Banco Central para activar una economía se da a través de la determinación de la capacidad crediticia del sector financiero que ejerce cuando determina la cantidad de dinero que los bancos deben mantener inmovilizados, es decir fuera del alcance de sus posibles clientes demandantes de crédito.

Esa inmovilización de dinero funciona como respaldo a la solidez del sistema financiero para evitar que ningún banco esté imposibilitado de devolver sus ahorros a los ahorristas que decidan retirarlos.

Si las cantidades inmovilizadas son elevadas, las posibilidades de acceder al crédito se restringen; aunque el sector financiero es más sólido, cae la oferta de dinero y se incrementa la tasa de interés, es decir aumenta el costo de los préstamos.

Si el Banco Central autoriza menor nivel de dinero inmovilizado, la capacidad crediticia se incrementa, aumenta su oferta y el precio del dinero se reduce, es decir, cae la tasa de interés.

La capacidad de manejar, controlar u orientar el precio del dinero de manera precisa, es una herramienta básica y fundamental para motivar el crecimiento de la Demanda Agregada. Es una de las dos principales variables de cualquier modelo económico de una *sociedad*, a no ser que ésta decida utilizar en su propia economía la moneda de otra economía.

Pero dejemos estas especificidades de la política monetaria que, si bien revisten importancia, no son parte substancial del análisis de este trabajo. La convertibilidad no es una solución en sí misma, sólo es una herramienta para encontrar una posible solución para acotar la libertad de acción de los políticos, que particularmente tiene

el atributo o la cualidad de promover y fomentar condiciones favorables para acceder a mejores niveles de competitividad; al usar como patrón monetario la moneda de una *sociedad* con mayor bienestar, inmediatamente ordena la estructura de costos de producción en un mismo sistema de medidas con lo cual es más fácil identificar los sectores más productivos para potenciarlos y los menos productivos para reestructurarlos, y desde ahí desarrollar políticas orientadas a su perfeccionamiento. No es demonio ni tampoco es la salud plena. Sólo es una receta de un posible remedio que sirve para mejorar la situación económica circunstancialmente. Es un mecanismo que puede permitir realizar los ajustes necesarios en otras áreas más desordenadas de la política y la economía.

El hecho que nuestras *oligarquías* gobernantes no la hayan sabido dejar de lado de manera organizada para volver al establecimiento del valor de nuestro dinero según el libre juego de la oferta y la demanda, para que los parámetros fundamentales de la economía se equipararan a los niveles de competitividad internacional creando condiciones de estabilidad y percepción de seguridad y continuidad para generar expectativas lógicas y fortalecer la confianza de los ciudadanos, los agentes económicos, trajo aparejado el choque frontal con una durísima devaluación impuesta de facto con atroces consecuencias sociales,<sup>3</sup> que deberán pagarse caro por mucho tiempo.

Al haber sido imposible realizar los ajustes en la política y la economía a partir de la regulación y estabilidad que imponía la convertibilidad con la cintura política adecuada y necesaria, se hace muy difícil lograrlo en un sistema de tipo de cambio fijo o de flotación sucia, donde existe abierta aptitud de los políticos conductores para hacer uso inadecuado de la política monetaria, fiscal o cambiaria, donde de hecho, el ajuste del valor de la moneda siempre se da en función del nivel de competitividad que alcance el aparato productivo de la economía, que lamentablemente no ha podido adaptar su estructura de costos reales a la economía global o de interacción internacional. Si no navegáramos en una economía globalizada; si construyéramos paredones de protección y nos aisláramos a vivir un mundo propio, fronteras adentro, quizás el modelo tendría un poco más de vida; pero la intervención permanente de los políticos en la actividad económica tanto en la cosa pública como en la interrelación de los particulares, directa e indirectamente coarta las libertades individuales, atenta contra la *afinidad* y destruye la identidad.

Volvamos a nuestro análisis.

Ahora conocemos con relativa precisión los dos elementos fundamentales que nos permiten continuar avanzando en nuestro estudio: Por un lado, sabemos que la Demanda Agregada de la economía está integrada por la demanda de los particulares más la demanda del Estado y que todos tienen capacidad de ahorro. Por otro, sabemos que los consumidores y el Estado tienen una restricción fija en su capacidad de generar ingresos genuinos y de adquirir endeudamiento. En otros

---

<sup>3</sup> Monteverde, Agustín A. "Estrategias para la Competitividad Internacional" (Argentina: Machi Grupo Editor S.A., 1992) – Capítulo 5 – subtítulo: Comparabilidad, p 75

términos, podemos decir que la Demanda Agregada será equivalente al total de consumo realizado por los particulares más el total de gasto realizado por el *gobierno*, visto como la administración del Estado, más el total de ahorro generado por toda la economía, más el saldo del intercambio comercial con otras economías. Esto será equivalente al total de producción generada por la *sociedad* en un nivel de precios de *equilibrio* establecido en cada momento, que permitirá determinar la restricción presupuestaria propia de los consumidores y del *gobierno*, o sea, el ingreso total de la economía.

De esta manera la Demanda Agregada será equivalente al ingreso total de la economía en un nivel de precios de *equilibrio* determinado, algo similar a lo que se conoce técnicamente como Producto Bruto Interno.

La incidencia del intercambio comercial con otras economías es decir, el saldo entre las exportaciones y las importaciones, lo veremos un poco más adelante, pues de lo contrario incorporaremos demasiadas variables y nunca podremos alcanzar nuestro *objetivo* más *importante* en este análisis que es tratar de restringir la libertad de acción de los políticos, para luego hacer lo *necesario*: demostrarles que no perderán *poder*, sino que contarán con las herramientas apropiadas para ejercerlo, e impulsar el crecimiento de la economía sin correr riesgo de entrar en el círculo vicioso de la generación de distorsiones que originan más distorsiones y que conspiran contra las posibilidades de los ciudadanos de alcanzar su bienestar con un mejor nivel de vida. Por convención, la ecuación fundamental de nuestro análisis es la siguiente<sup>4</sup>:

$$DA = A + C + GP + SE$$

en donde:

<b>DA = Y</b>	Demanda Agregada = Ingreso Total = PBI
<b>A = I</b>	Ahorro = Inversión
<b>GP</b>	Gasto Público
<b>C</b>	Consumo de los particulares
<b>SE</b>	Sector Externo

El tamaño de la economía de una *sociedad* puede medirse en función de su consumo total o de su ingreso total, que es lo mismo, es decir, es equivalente si consideramos que todo lo que se produce se vende, genera ingresos y se consume; que los excedentes se convertirán en ingresos para períodos futuros y que los faltantes no serán ni ingresos ni consumos.

Precisemos la definición de algunos conceptos que son de uso cotidiano y que pocos identificamos correctamente.

---

<sup>4</sup> Samuelson, Paul A., Nordhaus William D. "Economía" (Argentina: McGraw-Hill Editores, decimotercera edición) – Capítulo VI, "Medición del Producto y la Renta Nacionales", p 140

El PBI, o Producto Bruto Interno es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por una economía a lo largo de un período de un año de duración. Su composición obedece a los tres términos: *Producto*, que se refiere a la producción de una economía, es decir, el valor agregado a los bienes primarios, o sea la *riqueza* propia del territorio; *Bruto*, que es una atribución contable estrictamente técnica que indica que no se contabilizan las variaciones de inventarios, ni las variaciones en la valoración del capital; e *Interno*, que se refiere a la producción dentro de las fronteras de una misma economía.

En términos generales y sin caer en mayores precisiones técnicas, llamaremos al consumo total, Demanda Agregada, y al ingreso total, Producto Bruto, considerando la igualdad entre ellos.

Después de esta simplificada descripción de conceptos teóricos de la ciencia económica que sirve para comprender cómo están interrelacionadas las conductas de los ciudadanos, ya sean particulares o gobernantes, podemos establecer un paralelo entre la búsqueda del bienestar social y la búsqueda del progreso económico.

Dado que la generación de *riqueza*, la búsqueda de *abundancia* de medios y recursos, contribuye al bienestar de la *sociedad*, en términos técnicos, la economía debe perseguir el incremento permanente de la Demanda Agregada, es decir el crecimiento del PBI.

Solamente, con este lenguaje, hemos incorporando elementos teóricos y prácticos a la idea de hacer una torta de cumpleaños más grande para que los niños que rodean la mesa no se peleen y queden todos satisfechos.

En el próximo punto veremos cómo lograrlo técnicamente, utilizando la menor cantidad de herramientas posibles de modo de evitar perder la capacidad de control. Estas herramientas serán las que los políticos deberán utilizar para controlar todas las variables de la economía. Utilizando estas herramientas se acota su capacidad de intervención distorsiva, muchas veces involuntaria; se los arma con lo estrictamente necesario para conducir adecuadamente la evolución de la economía, y se potencian entre los ciudadanos, los agentes económicos, las posibilidades de predecir consecuencias futuras que surjan del manejo de esas herramientas, con lo que se facilita la capacidad de tomar decisiones de riesgo relacionadas con la producción y el consumo de bienes y servicios. Más adelante nos abocaremos a resolver la cuestión de la distribución adecuada de la *riqueza* producida.